

Masacres y violencia policial en Colombia: ¿estallido social?

Paula Companioni

análisis
y debate

Masacres y violencia policial en Colombia: ¿estallido social?

Paula Companioni*

Fotografía de la portada: Federico Ríos.

* **Paula Companioni**, periodista graduada en la Universidad de La Habana (Cuba) y comunicadora popular formada en el Centro Memorial Martín Luther King (Cuba). Editora de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa. Ha sido periodista para *La Jiribilla*, *Desinformémonos*, *Contexto Latinoamericano* y *Correo del Alba*. El presente texto hace un análisis de coyuntura en Colombia a partir de los sucesos violentos de los primeros 15 días de septiembre de 2020 y de las coberturas noticiosas que realiza a diario la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa (www.colombiainforma.info). Esta agencia se propone reflejar la realidad social y política de Colombia, de Nuestra América y del mundo desde una mirada popular; la integran corresponsales en las distintas regiones del país; busca romper el cerco informativo que los grandes medios de comunicación crean sobre los distintos actores del pueblo; y se nutre del aporte de colectivos de comunicación popular que complementan su labor local con la publicación de sus producciones, logrando una mayor difusión nacional e internacional.

Masacre en Bogotá

Un video¹ de un poco más de cinco minutos muestra cómo dos policías asfixiaron y atacaron con sostenidas descargas eléctricas a Javier Ordóñez, taxista y estudiante de Derecho de 43 años, padre de dos hijos, al que durante la filmación se le puede escuchar diciendo: “Paren, por favor, me ahogo...”. El video termina con Ordóñez siendo conducido, casi moribundo, a un Centro de Atención Inmediata² (CAI) en Villa Luz, Engativá (Bogotá). Minutos más tarde, Ordóñez fue llevado sin signos vitales al hospital más cercano. Allí murió, como consecuencia de más de 40 golpes que le

1 <https://bit.ly/30kEIIIX>

2 Los CAI son unidades policiales con una jurisdicción menor, que hacen parte de las diferentes estructuras de la Policía Nacional. Están estratégicamente ubicados en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas, lo cual les permite la vigilancia específica de los sectores asignados.

dañaron el hígado (según reza la autopsia³). La mañana siguiente a estos hechos (el 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos en Colombia) el país se levantó indignado. Este asesinato colmaba muchas copas. El subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno, salió a decir que el homicidio de Ordóñez no podía verse como algo institucional sino individual, y que no había lugar para pensar que la Policía en sí misma estaba mal. El presidente Iván Duque también dijo que había “que individualizar la responsabilidad”. La organización no gubernamental (ONG) defensora de derechos humanos Temblores recoge⁴ en un reporte preliminar de su informe *Bolillo, Dios y Patria* que entre 2017 y 2019 fueron cometidos 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 casos de violencia sexual a manos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia colombianos. Dadas las condiciones de precariedad que se han hecho más visibles durante la cuarentena ocasionada por la Covid-19, sumadas a otros tres casos de brutalidad policial altamente difundidos⁵, podría entenderse la indignación con la que la noche del 9 de septiembre se salió a las calles. En Ibagué, Cali, Neiva, Medellín, Barranquilla, Pitalito, Bucaramanga⁶, Pereira, Tunja, Popayán⁷ y

Bogotá⁸ se convocaron movilizaciones para esa noche. Las y los ciudadanos se juntaron alrededor de varios CAI con la forma de protesta conocida como “cacerolazo”. En algunas de estas protestas se gritó, en otras se pintaron las paredes, en unas pocas se rompieron las ventanas y en 12 se quemaron los CAI. La respuesta de la Policía fue brutal. Solamente en la capital del país, según la propia alcaldesa Claudia López, el resultado del accionar de la fuerza pública fue equivalente a “un combate en las peores épocas del conflicto”⁹. López también dijo que la Policía desobedeció su orden expresa de no usar armas de fuego para disipar las marchas. El 10 de septiembre continuaron las protestas en varios puntos del país. Bogotá, Cali y Medellín fueron las tres urbes con más reportes de población civil y desarmada que terminó abatida por la Policía: 14 muertos (13 por disparo y el asesinato de Javier Ordóñez), mujeres violadas por la fuerza pública, 58 heridos por arma de fuego (junto a otros 400 lesionados), periodistas y defensores de derechos humanos robados y/o agredidos fueron el resultado de la actuación policial en ambas jornadas.

La cobertura mediática de la derecha ha sido cómplice de la Policía: *RCM*¹⁰ dijo: “Grupo de vándalos armados sembró el terror entre conductores en Suba”, *Caracol* dijo: “Durante protestas, vándalos causaron daños por más de mil millones en Cali”, *El Tiempo* dijo: “Así operan y se organizan

3 <https://bit.ly/2GkaNEv>

4 <https://bit.ly/3kYgqH0>

5 El asesinato de Anderson Arboleda a causa de una golpiza con mazos de madera que le propinó un policía en el Cauca; el asesinato de Dilan Cruz por parte de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, quien le abrió la cabeza con el tiro de una munición repleta de perdigones en Bogotá; y la violación de una joven de 20 años perpetrada en un bus de la Policía Metropolitana de Bogotá por parte de uno de los integrantes de esa fuerza.

6 <https://bit.ly/3n3vCVj>

7 <https://bit.ly/33jX2hA>

8 <https://bit.ly/2SdxbSm>

9 <https://bit.ly/30oe7p1>

10 *Emporio de comunicación conocido por las siglas que abrevian el nombre Radio Cadena Nacional, perteneciente al millonario colombiano Carlos Ardila Lullé.*

grupos radicales y de vándalos en Bogotá” y *NTN24* dijo: “Indignación por abuso policial terminó en vandalismo y agresiones en Colombia”. Se podrían citar muchos más. Se esforzaron por implantar la idea de que las protestas por la brutalidad policial no era más que actos vandálicos de jóvenes delincuentes.

¿Por qué tanta violencia?

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó, a inicios de septiembre de este mismo año, el *Informe de masacres en Colombia durante el 2020*¹¹. Un corte realizado el 21 de septiembre contabiliza que, en lo corrido del año, se han sucedido 61 masacres en el país. En ellas han muerto 246 personas, en 19 departamentos del territorio nacional. La mayoría de estas masacres son adjudicadas a estructuras paramilitares que nunca se desmovilizaron y hoy actúan impunemente, sin un mando único y controlando rutas de tráfico de drogas, armamento y personas. “Muchas personas han dicho: ‘volvieron las masacres, volvieron las masacres’, primero hablemos del nombre preciso: ‘homicidios colectivos’, y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos”, afirmó Iván Duque. Estas declaraciones levantaron mucha polémica, incluso en los medios que usualmente lo respaldan. ¿Por qué el presidente del país habla con eufemismos? Sus palabras no son más que la ejemplificación clara de cómo piensan y operan las clases dominantes en Colombia.

El propio Indepaz define como masacre: “el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”¹². El sociólogo e integrante de la Red Antimilitarista de América Latina, Diego Bonilla, resalta en su texto *Colombia: entre el genocidio y la resistencia*¹³ que una de las estrategias que se utiliza en el genocidio como práctica social “es la construcción de eufemismos mediáticos que difuminan el significado y la magnitud de esta realidad que desborda la ficción (...) desconociendo así una historia donde las masacres aparecieron con fuerza durante los años 90, cuando el paramilitarismo y el Ejército de Colombia descubrieron que masacrar comunidades era una forma mucho más eficaz de intimidar y sembrar el terror en poblaciones que consideraban de su oposición”.

Para entender esto, quizás sería necesario un breve repaso de la historia de la violencia política como práctica social establecida por la oligarquía en Colombia. En 1974, ante la crisis petrolera, el Gobierno de Alfonso López Michelsen comenzó un cambio del tipo de modelo de acumulación capitalista: la imposición del neoliberalismo en el país y la vuelta a la tierra como elemento central de poder. Se constituyeron dinámicas de gobierno centradas en regímenes autoritarios (que hoy podemos identificar en el “uribismo” del que hacen parte Iván Duque y su Gobierno). Las clases dominantes utilizaron

11 <https://bit.ly/3jn7gmW>

12 *Idem.*

13 <https://bit.ly/30nyh28>

el terrorismo de Estado¹⁴ para eliminar y regular a sus contradictores. La oligarquía colombiana, desde esa época, llegó a una conclusión: para que exista el neoliberalismo (y así ellos seguir acumulando capital a gran escala) eran necesarias políticas y dinámicas de desposesión.

A diario se observa en Colombia una fuerte militarización de la sociedad. Lo que vimos el 9 y 10 de septiembre (cuando la Policía supuestamente no hizo caso de las órdenes de sus mandos regionales –la Alcaldía–) va de la mano con la militarización de los territorios donde la fuerza pública no actúa en sintonía con los gobernantes sino que acata las órdenes del poder real: los grandes terratenientes, las empresas megaextractivas o el narcotráfico¹⁵.

Mucho por lo que protestar

Los casos relatados por Indepaz en el ya citado *Informe de masacres en Colombia durante el 2020* involucraban, en su mayoría, a líderes y lideresas que promovían alternativas al modelo económico, oponiéndose a los proyectos extractivistas; personas firmantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); o jóvenes estudiantes y víctimas desplazadas del conflicto

que estaban exigiendo la restitución de sus tierras. Pero estos no son los únicos hechos, a continuación hacemos un breve recuento de lo que hemos relatado y denunciado en Colombia Informa este año:

- **Violencia contra las mujeres**

La Personería de Bogotá¹⁶ disparó las alarmas de la población colombiana al anunciar que la violencia de género había aumentado en un 230 % durante la cuarentena. Esta alarma fue intensificada durante el mes de junio, cuando en el lapso de una semana se conocieron las noticias de siete feminicidios perpetrados uno detrás del otro (cinco de ellos en menos de 48 horas¹⁷). Las mujeres y la comunidad trans comenzaron a sentirse más insegura de lo habitual. El Observatorio Feminicidios Colombia también denunció que, durante este año, se han cometido 243 feminicidios¹⁸, el 52 % de estos (185 casos) perpetrados por hombres en armas¹⁹.

El secuestro y la brutal agresión sexual que sufrió una niña del pueblo Embera Katio por parte de soldados del Ejército Nacional también impactó a la opinión pública nacional²⁰ y aumentó la indignación. Durante todo el año, en el país también han sido noticias las violaciones, desapariciones y la oleada de denuncias de acoso y abuso contra

14 “El terrorismo de Estado es una forma del ejercicio del poder estatal cuya regla de conocimiento permite y/o impone, con miras a crear el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al Gobierno en agente activo de la lucha por el poder” (Garzón Valdés, 2001: 147).

15 <https://bit.ly/33iio7>

16 La Personería es un órgano de control del Distrito Capital sobre la gestión de la Alcaldía. Vela por la promoción y protección de los derechos humanos, vigila el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos.

17 <https://bit.ly/2S13YEQ>

18 <https://bit.ly/3jm20jr>

19 <https://bit.ly/2SjgTrc>

20 <https://bit.ly/34genz9>

mujeres en múltiples ámbitos de la sociedad. ¿Qué tiene que ver que estos delitos sean contra las mujeres? Que no son crímenes comunes sino de poder.

- Violencia contra comunidades autogestionadas

Las comunidades rurales de varias zonas de Norte de Santander, el Chocó, el Cauca y Antioquia han hecho una denuncia constante ante la violencia y los asesinatos sistemáticos, que se han recrudecido a raíz de la militarización durante la pandemia²¹.

Los pueblos indígenas del Suroccidente colombiano han visto en el último período un aumento del asesinato sistemático de varios de sus líderes. Además, el avance sostenido y violento de los grupos armados que se disputan el control de los territorios —donde no hay presencia del Estado desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016— no deja una semana sin que haya al menos una denuncia de asesinato de algún líder o lideresa indígena que se opone a que las economías del narcotráfico gobiernen su territorio.

Entre 1.000 y 1.200 familias decidieron ocupar las tierras y lotear cuadrillos de 6 por 12 metros en un terreno ubicado en las inmediaciones de Ciudadela Sucre (Soacha), porque se habían quedado sin vivienda a causa de la crisis económica disparada por la cuarentena, que para las familias que se sustentan con una “economía del día a día” ha significado hambre y desalojos. Esta toma de tierras se complicó el 24 de junio, cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios ocasionó

la muerte de Duván Aldana, un joven de 14 años de edad²².

Asimismo, en el barrio Altos de la Estancia (ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá) se desarrollaron violentos desalojos durante varios fines de semana del mes de mayo. En estos, la prensa fue agredida²³ y la Alcaldía fue acusada de utilizar un *modus operandi* parecido al de los grupos paramilitares para seleccionar las casas donde debía proceder el accionar de la fuerza pública²⁴.

El decreto de “pico y género” fue una política pública implementada en Bogotá en el marco de la cuarentena por la Covid-19. Comenzó en abril y tenía el fin de reglamentar la presencia de la ciudadanía en las calles. Pero la comunidad trans y no binaria de la ciudad alertó sobre el carácter inconstitucional de este decreto, porque dio pie a situaciones de violencia en contra de estas personas²⁵.

Las trabajadoras sexuales sufrieron no solo los olvidos del Estado ante las recias condiciones económicas de la pandemia, sino que también vivieron diferentes ataques de violencia policial cuando decidieron salir a exigir sus derechos²⁶.

- Violencia contra las personas privadas de libertad

La emergencia carcelaria se debe, sobre todo, a la sobrepoblación que existe en los

21 <https://bit.ly/3naZLC8>

22 <https://bit.ly/3nhx9Hx>

23 <https://bit.ly/3nclZn5>

24 <https://bit.ly/30nW3v0>

25 <https://bit.ly/33iGeYw>

26 <https://bit.ly/3nh76D>

centros penitenciarios del país. Este es un detonante para la vulneración sistemática de derechos fundamentales (salud, alimentación, trato digno) al interior de las cárceles. La llegada de la Covid-19²⁷ causó un pánico general entre la población privada de libertad, que en marzo (al comienzo de la cuarentena) terminó en una protesta que fue tratada con violencia extrema por parte de la fuerza pública encargada del orden penitenciario²⁸.

- Violencia contra el medioambiente

Actualmente, en el departamento de Santander se ejecutan movimientos para intervenir una parte del páramo de Santurbán, lo que implicaría un deterioro inminente de ese ecosistema y, por ende, de los recursos naturales indispensables que allí se encuentran, como el agua²⁹.

- Violencia contra la prensa alternativa

El 15 de junio se llevó a cabo la primera jornada de movilizaciones en distintas ciudades del país, luego de casi tres meses de cuarentena. En Medellín, la prensa que salió a cubrir esta marcha fue agredida y censurada brutalmente por las fuerzas policiales³⁰. Esto ocurrió a pesar de la presencia de defensores de derechos humanos y de funcionarios de la Personería (quienes también sufrieron la violencia). Este tipo de acciones no son casos exclusivos sino que lo viven cotidianamente los medios de comunicación comunitarios alternativos.

- Movilizaciones contra los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales

La “Marcha por la dignidad” legó de Popayán a Bogotá para exigir al Gobierno acciones urgentes frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, excombatientes, mujeres y menores de edad. Esta protesta fue desarrollada por líderes y lideresas sociales de 40 organizaciones de todo el país. Estudiantes, indígenas, comunidades negras y campesinas caminaron alrededor de 600 kilómetros desde Popayán pidiendo un alto al asesinato sistemático en contra de ellas y ellos³¹.

Violencia transversal en el gobierno de Iván Duque

El actual Gobierno colombiano ha aprovechado el confinamiento y la inmovilidad social para gobernar por decreto. Los resultados más visibles son: el aumento de la militarización de la vida social, el aumento de la violencia política y la represión, la imposición de paquetazos neoliberales, la intensificación del extractivismo y explotación de recursos de la naturaleza, y una mayor precarización del trabajo y erosión de todos los derechos laborales.

Transparencia Internacional, ONG que se dedica a vigilar los crímenes corporativos, alertó este año sobre la concentración de poder del presidente Iván Duque³². Resaltó el hecho de que el Gobierno se “convirtió en legislador transitorio” y la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están en manos de allegados y exfuncionarios del anterior

27 <https://bit.ly/2GwxXXN>

28 <https://bit.ly/3ijyRV2>

29 <https://bit.ly/3l9aKu3>

30 <https://bit.ly/36qHI50>

31 <https://bit.ly/30s8ANY>

32 <https://bit.ly/3nbWL8D>

gobierno uribista. Todo esto, poco después de que se diera a conocer que el Ejecutivo pagó a la firma Du Brands para perfilar a los influenciadores que hablaban bien o mal del Gobierno. Esa misma compañía logró un contrato de más de 3.000 millones de pesos (sacados de los recursos para la paz) con el fin de mejorar la imagen del mandatario.

El crédito de 370 millones de dólares estadounidenses que el Gobierno destinó para “salvar” a la aerolínea Avianca, declarada en bancarrota durante este año³³, indignó a la población. Es poco ético este préstamo en medio de una crisis en la que estudiantes de varias universidades públicas del país han realizado huelgas de hambre para intentar que se les otorgue matrícula cero para el siguiente semestre³⁴. Esta ha sido la política económica de Iván Duque durante la pandemia: salvar al gremio de grandes empresarios que lo acompañan y acelerar el proceso de implantación de sus medidas de recorte de derechos públicos.

El 17 de agosto de este año se anunció la firma de un nuevo acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. Ese acuerdo se llama “Colombia crece”, aunque en realidad es una nueva versión del ya conocido Plan Colombia: un paquete de ayuda económica y militar que se basa en el argumento de “colaborar en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo”³⁵. El Plan Colombia original, firmado en 1999 entre los entonces presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana, también fue presentado como “un plan para combatir

al narcotráfico y promover alternativas de desarrollo en el país”. En realidad, ambos acuerdos son paquetes de ayuda militar contrainsurgente y reforzadora del Ejército Nacional como una fuerza al servicio de los intereses de Estados Unidos.

Además, el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC, aumentó dramáticamente los asesinatos de líderes y lideresas sociales. El Gobierno de Iván Duque afirma que él no tiene por qué cumplir algo que no firmó, así como tampoco tiene por qué dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con esta proyección militarista, una sola puede suponer que al actual Gobierno y a la clase que representa le sirve la guerra.

Tumbar los símbolos del colonialismo

Otro video³⁶ ha recorrido el país, pero esta vez llenando de esperanza y fuerza muchos corazones. El pueblo indígena Misak se reunió en la pirámide de Tulcán (Popayán) para derribar la estatua del invasor y esclavista español Sebastián Belalcázar, que coronaba ese sitio espiritual ancestral desde hacía mucho tiempo. Es un mensaje del sabio pueblo indígena para toda Colombia: no importa cuántos años nos demoremos, lograremos tumbar al genocida. La acción del pueblo Misak hace pensar en otras estatuas que han sido derrumbadas a lo largo y ancho del continente. Unas se derribaron en las manifestaciones antirracistas que tienen lugar por estos días en los Estados Unidos. Otras fueron “redecoradas” por feministas que también protestan contra la violencia

33 <https://bit.ly/2Ggitri>

34 <https://bit.ly/3njT3d8>

35 <https://bit.ly/3lb5d6h>

36 <https://bit.ly/36qmSTm>

patriarcal en todo el mundo. Y algunas fueron sitio de encuentro y punto estratégico de las movilizaciones populares que en 2019 embellecieron países como Ecuador, Chile y Puerto Rico.

Estos levantamientos populares hacen ver el surgimiento de un sujeto generacional que expresa su malestar frente a la cultura de la actual sociedad y salen a las calles para vivenciar la política como sentimiento de rechazo a la violencia estructural que se evidencia en la actuación de la Policía en todo el orbe. Jóvenes sin muchas esperanzas pero con mucha rabia e indignación frente a Estados que no cuidan más que sus propios intereses. En Colombia, algunas de estas personas están organizadas en las conocidas barras de fútbol y quizás no tienen una perspectiva de la política como la tienen los sectores tradicionales dentro de la izquierda; sin embargo, son los sujetos protagónicos de estos estallidos y coyunturas políticas, porque sienten a diario todas las violencias del Estado en su propia piel. El asesinato de Javier Ordóñez agudizó los reclamos populares que las habían movilizado entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2019, cuando se desarrolló el Paro Nacional conocido como 21N. En ese entonces, los profundos descontentos con la política desarrollada en el año y medio de gobierno de Iván Duque habían ampliado tanto la brecha de desigualdad social que casi todo el pueblo salió a la calle. Este paro agravó la crisis de gobernabilidad y legitimidad del presidente ultraderechista.

En la mañana del 11 de septiembre, entre las cenizas de los CAI, se erigieron bibliotecas comunitarias como respuesta a la brutalidad

policial. Las comunidades bautizaron estas bibliotecas en honor a las personas masacradas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre. Pusieron música, pintaron murales y donaron decenas de libros. Aunque esas manifestaciones artísticas, culturales y pacíficas también fueron reprimidas por la Policía, son muestra de que existe una alternativa a la violencia que hoy propone el Estado como mediador de las relaciones políticas en Colombia. No hay que buscarla en ninguna otra parte, está en nosotros y nosotras. Es la misma comunidad.

Bibliografía

Garzón Valdés, Ernesto. *Filosofía, política, derecho*. Universidad de Valencia, Valencia, 2001.

Título: Masacres y violencia policial en Colombia: ¿estallido social?

Autora: Paula Companioni

Publicado por: Fundación Rosa Luxemburg Oficina Región Andina

Miravalle N24-728 y Zaldumbide

Teléfonos: (593-2) 2553771 / 6046945 / 6046946

info.andina@rosalux.org / www.rosalux.org.ec

Quito · Ecuador

Diseño: Freddy Coello

Foto de la portada: Federico Ríos

Esta publicación es financiada con recursos de la FRL con fondos del BMZ (Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la República Federal de Alemania). Esta publicación o algunas secciones de ella pueden ser utilizadas por otros de manera gratuita, siempre y cuando se proporcione una referencia apropiada de la publicación original.



Esta publicación opera bajo Licencia Creative Commons Atribución No Comercial, sin Modificaciones 3.0. Todos los contenidos pueden ser usados y distribuidos libremente siempre que las fuentes sean citadas.